



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

### CERTIFICA

Que en la Sesión 24/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 29 de junio de 2006, se ha adoptado el siguiente

### ACUERDO

Por el que se aprueba la:

**RESOLUCIÓN RELATIVA AL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR ALBURA TELECOMUNICACIONES, S.A.U. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2005 POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS CAUTELARES EN EL CONFLICTO DE ACCESO PRESENTADO POR TELE2 TELECOMMUNICATION SERVICES, S.L. FRENTE A LA RECURRENTE.**

En relación con el recurso potestativo de reposición interpuesto por ALBURA TELECOMUNICACIONES, S.A.U. contra la Resolución de esta Comisión de 21 de diciembre de 2005, recaída en el expediente RO 2005/1729, por la que se adoptan medidas cautelares en el conflicto de acceso presentado por TELE2 TELECOMMUNICATION SERVICES, S.L. frente a ALBURA TELECOMUNICACIONES, S.A.U. en relación con la supresión de los servicios de acceso indirecto y desagregado compartido por parte de este último operador, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en su sesión núm. 24/06, ha adoptado la siguiente:

Resolución de 29 junio de 2006, recaída en el expediente **AJ 2006/ 74**.

### HECHOS

**PRIMERO.-** Con fecha 19 de diciembre de 2005, tuvo entrada en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones escrito de TELE2 TELECOMMUNICATION SERVICES, S.L. (en adelante, TELE2) por el que vino a formular conflicto de acceso frente a la entidad ALBURA TELECOMUNICACIONES, S.A.U. (en adelante, ALBURA).

**SEGUNDO.-** Con fecha 21 de de diciembre de 2005, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones dictó una resolución por la que se



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

adoptaban medidas cautelares en el conflicto de acceso planteado por TELE2 en relación con la supresión de los servicios de acceso indirecto y desagregado compartido por parte de ALBURA. En esta resolución se resolvía que:

**“ÚNICO.-** Adoptar, en el seno del conflicto que mantienen TELE2 TELECOMMUNICATION SERVICES, S.L. y ALBURA TELECOMUNICACIONES, S.A., la medida cautelar consistente en que este último operador siga prestando a TELE2 TELECOMMUNICATION SERVICES, S.L.. el servicio de “Acceso Indirecto” y de “Acceso Desagregado Compartido” objeto del Contrato de 9 de junio de 2004 en los términos del citado contrato hasta que se dicte Resolución que ponga fin al conflicto planteado.”

**TERCERO.-** Con fecha 12 de enero de 2006, tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de ALBURA por el que solicitaba la modificación de la medida cautelar adoptada mediante la resolución anterior, así como la prestación por parte de TELE2 de caución de, al menos, 6.188.077,42 euros.

Subsidiariamente, mediante otrosí, ALBURA solicitaba que se entendiese el contenido de su solicitud como escrito de interposición de recurso de reposición contra la Resolución de 21 de diciembre de 2005.

En este escrito, la recurrente expone, básicamente, lo siguiente:

1. *Que la solicitud formulada por TELE2 se fundamenta en una conducta claramente desleal y abusiva, constituyendo un intento de reconducir al ámbito del Conflicto de Acceso lo que es una disputa puramente contractual. Falta de competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.*

ALBURA alega que el conflicto de acceso presentado por TELE2 no es ni un conflicto de acceso ni de interconexión, sino que es una disputa contractual que debería ser discutida en sede arbitral. Primero, porque ALBURA entiende que no estaba obligada legalmente a prestar acceso a TELE2. Segundo, tampoco estaba obligada legalmente a conectar su red con la red de TELE2. En consecuencia, al no ser ni un conflicto de acceso ni un conflicto de interconexión, alega que la Comisión no tiene competencia para intervenir.

ALBURA aduce en su escrito que si para TELE2 era esencial el mantenimiento de los Servicios de Acceso objeto del Contrato debía haber procedido a instar el procedimiento contractualmente previsto para mantener la vigencia del contrato. Se remite en este punto al artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que no se podrán adoptar medidas cautelares en aquellos casos en los que se pretenda alterar situaciones que han sido consentidas por el solicitante.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

2. *Que TELE2 era plenamente consciente de que ALBURA no iba a suspender los Servicios de Acceso en el sentido del Contrato. Existencia de una actuación maliciosa y fraudulenta de TELE2.*

Alega que, en contra de lo que afirmaba TELE2, no iba a proceder al corte o a la supresión de los servicios objeto del Contrato a partir del 31 de diciembre de 2005. La recurrente alega que en todas las comunicaciones que han sido enviadas a TELE2 se ha puesto de manifiesto la necesidad de la migración de las líneas de TELE2 hacia otros operadores y la necesidad de que esa migración se realizara antes del 31 de diciembre de 2005 evitando que, en cualquier caso, “*el conflicto contractual redunde en perjuicio de los usuarios finales*”. ALBURA pretendía “acelerar” el procedimiento de migración de las líneas para que la resolución del contrato surtiera efectos cuantos antes.

Se aporta como documento nº 3, una comunicación entre las dos partes, de fecha 28 de diciembre de 2005, de la que se desprende, según ALBURA, que su intención nunca fue suspender los servicios a 31 de diciembre de 2005. A través de esta comunicación, la recurrente solicitaba información acerca del estado del procedimiento de migración e informaba a TELE2 de que “*a partir del 31 de diciembre y hasta la fecha en que la que proceda a desactivarlas serán de aplicación a aquellas líneas que se mantengan activas las nuevas tarifas (...)*”.

Asimismo, en esa comunicación ALBURA informaba de que el día 10 de enero se iba a realizar un Trabajo Programado, lo que indica que no se iba a suspender el servicio y que era plenamente consciente de la importancia del interés de los usuarios finales del servicio.

3. *Que no concurren los requisitos necesarios para la adopción de la medida cautelar. En cualquier caso, que es necesaria la prestación de caución por parte de TELE2.*

1º) ALBURA alega que falta el presupuesto del *periculum in mora*. Igualmente, que falta el requisito de necesidad y de urgencia para la adopción de la medida inaudita parte.

El requisito del *periculum in mora* o del peligro de la mora procesal justifica que se acuerde una determinada medida cautelar ya que, de no hacerse, podría producirse durante la pendencia del proceso situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que, en su caso, pudiera otorgar una eventual sentencia estimatoria.

Es necesario, según ALBURA, que la parte que solicita la medida acredite la concurrencia del referido requisito. Alega que, en este caso, TELE2 ni siquiera menciona ni justifica en su escrito la concurrencia del requisito del *periculum in mora*.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

ALBURA manifiesta que la Comisión adopta las medidas *inaudita parte*, prescindiendo del trámite de audiencia. La Comisión se basa bien en que se trataba de una “*supresión inesperada del acceso prestado (o sin tiempo suficiente para la búsqueda de alternativas viables)*” o bien en que se impedía a TELE2 la prestación al mercado de sus servicios y a los usuarios seguir recibéndolo sin solución de continuidad.

Alega que en este caso no existe ninguna supresión inesperada o sin tiempo de reacción, por las siguientes razones:

- a) ALBURA no iba a proceder a la supresión de la prestación del servicio a partir del 31 de diciembre.
- b) Además, si se hubiera producido la supresión, en ningún caso, ésta hubiera sido inesperada o sin tiempo de reacción suficiente. ALBURA alega que se le comunicó la resolución del Contrato con fecha 14 de octubre de 2005.

ALBURA alega que no es hasta el 19 de diciembre de 2005 cuando restan apenas 10 días para que finalice el plazo concedido por ALBURA cuando TELE2 decide acudir a la Comisión para evitar que la resolución instada surta efectos.

Sin perjuicio de que TELE2 en ningún momento haya solicitado la adopción de una medida cautelar y, mucho menos, *inaudita parte*.

### 2º) Que TELE2 debe prestar caución necesaria.

ALBURA alega que la adopción de la medida cautelar puede irrogarle perjuicios a pesar de que, a juicio de la Comisión, esos perjuicios fueren en todo caso de tipo económico.

Alega que, en este caso, no se está cuestionando un posible impago por parte de TELE2, sino que lo que se cuestiona es la existencia de un grave incumplimiento por parte de TELE2 de las obligaciones asumidas en virtud del Contrato que han dado lugar a la resolución del Contrato. Este incumplimiento ha generado su obligación de hacer frente al Pago por Penalización previsto en la Cláusula 11 del Contrato y a los demás conceptos indemnizatorios.

Estas cantidades que no se han pagado son las que ALBURA está poniendo en cuestión, teniendo en cuenta que TELE2, en ningún caso, ha constituido la Prenda de Cuentas a Cobrar prevista en el Contrato que garantizaría el Pago por Penalización que debería abonarse en caso de incumplimiento.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

A juicio de ALBURA, la medida cautelar adoptada le ocasionaría perjuicios “empresariales”. Como consecuencia de la medida cautelar no puede hacer uso de las infraestructuras y equipos técnicos que necesariamente debe emplear para el mantenimiento del Servicio a TELE2 para otros usos y tampoco puede “reorientar” o “rediseñar” su estrategia empresarial para conseguir el máximo desarrollo de sus servicios.

Además, desde el punto de vista de la competencia en el mercado de los Servicios de Acceso, la medida cautelar beneficia a TELE2 y, en consecuencia, perjudica a ALBURA. No puede olvidarse que TELE2 es un competidor directo de ALBURA en el mercado de acceso. Así, a TELE2 le interesa más tener a ALBURA como “colaborador” en la prestación de los Servicios de Internet ADSL que permitir que ALBURA desarrolle su estrategia empresarial y rediseñe sus infraestructuras para la prestación de ese servicio de forma independiente.

Por todo esto, solicita que se modifique la medida cautelar y se acuerde la prestación por parte de TELE2 de una caución de, al menos, 6.188.077,42 euros. Cantidad que TELE2 está obligada a pagar por incumplimiento de sus obligaciones. Según ALBURA, sólo cuando se acuerde la prestación de esta caución, la medida será realmente idónea y proporcional.

**CUARTO.-** Con fecha 16 de febrero de 2006, tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de alegaciones de TELE2 en el que solicita que se desestime el recurso de reposición interpuesto de contrario, confirmando, por tanto, la Resolución recurrida por ser ajustada a Derecho.

En su escrito de alegaciones TELE2 expone, básicamente, lo siguiente:

1. Que existe una amenaza real de corte negada por ALBURA en su recurso.

Alega que existía una amenaza real y creíble de desconexión de los servicios contratados a ALBURA. El hecho determinante para que TELE2 acudiera a la Comisión en esa fecha fue la correspondencia intercambiada en el mes de diciembre de 2005 que se aporta como Anexo documental nº 1 junto a su escrito de alegaciones.

2. Que la Comisión es competente para intervenir en el conflicto.

TELE2 pone de manifiesto que tanto ella como la Comisión en la resolución recurrida están de acuerdo con ALBURA en que la disputa contractual suscitada debe ser resuelta en sede arbitral, según lo previsto por las partes en el contrato.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Alega que el único objeto de procedimiento del presente expediente es la amenaza de corte. Esto es un conflicto distinto al contractual sometido a arbitraje cuya naturaleza es la de un verdadero conflicto de acceso entre operadores y que, aun derivado de la disputa contractual existente, es distinto e independiente de la misma.

Así que, afirma que teniendo en cuenta la existencia de un contrato de acceso en los términos definidos en la regulación vigente y de la amenaza de ALBURA de cortar el acceso prestado, poniendo en riesgo la interoperabilidad de los servicios e intereses de los usuarios finales, resultaba lógico que TELE2 tuviese un interés legítimo para solicitar la intervención de la Comisión.

Por tanto, tratándose de un conflicto de acceso, la Comisión es plenamente competente para intervenir y resolverlo.

3. Que no existe mala fe por parte de TELE2 y que ALBURA no puede de resolver unilateralmente el contrato.

TELE2 alega que ALBURA a lo largo de todo su recurso pretende demostrar que ha desarrollado una estrategia fraudulenta y maliciosa para “confundir” a esta Comisión fingiendo una urgencia que no estaba justificada.

TELE2 afirma que solicitó la intervención de la Comisión mediante escrito de fecha 19 de diciembre por entender que existía un riesgo cierto para la interoperabilidad del servicio y, en última instancia, para los usuarios finales, si tal y como ALBURA había comunicado, llevaba a término la resolución unilateral del contrato y, por tanto, el corte del servicio.

4. Que la solicitud de ALBURA de prestación de caución suficiente por parte de TELE2 es improcedente.

Alega que la solicitud de ALBURA de imposición de una caución para garantizar la medida cautelar, cuantificada en base a la indemnización contractual por daños y perjuicios, es contradictoria con todo el recurso presentado por esta última.

Manifiesta, otra vez, que el objeto del presente expediente es la garantía del acceso en tanto en cuanto el órgano competente no declare, en su caso, la resolución del contrato, tal y como solicita ALBURA. Sin embargo, ésta pese a afirmar la naturaleza no contractual del presente expediente vincula la caución solicitada como modificación de la medida cautelar.

TELE2 considera que la aplicación de una penalización o indemnización no puede hacerse efectiva sin que exista previamente un laudo arbitral que así lo establezca. Además, considera que la caución solicitada no puede ser impuesta en el presente expediente pues supondría prejuzgar el fondo del





## **COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES**

asunto contractual, el cual ninguna de las partes cuestiona que es competencia del órgano arbitral. Una caución de esta naturaleza sería, en todo caso, objeto de una medida cautelar en el proceso arbitral pero debe ser inadmisibile en el seno del presente procedimiento.

La caución excede el objeto del presente procedimiento y únicamente podría haberse vinculado a los posibles daños que el mantenimiento del acceso en las condiciones pactadas pudiera causar a ALBURA. Los perjuicios que pudieran derivarse de la medida cautelar deberían ceñirse únicamente a la esfera del lucro cesante.

Finalmente, alega que no es de justicia la imposición de la caución puesto que, en ningún caso, puede establecerse el derecho a una penalización/indemnización sin que exista un laudo previo. La imposición de una caución por el importe de la indemnización supondría, ahora sí, estar prejuzgando el asunto de fondo, sobre el cuál, la Comisión, TELE2 e incluso ALBURA, reconocen que debe ser tratado en el arbitraje.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

#### **A. Fundamentos jurídicos procedimentales.**

##### **Primero.- Calificación.**

En su escrito de fecha 12 de enero de 2006, ALBURA solicita a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la modificación de la medida cautelar adoptada mediante la Resolución de 21 de diciembre de 2005. Subsidiariamente, mediante otrosí, solicita que se entendiese el contenido de su solicitud como escrito de interposición de recurso de reposición contra la citada resolución.

Por tanto, ALBURA otorga a su escrito un doble carácter, por un lado una solicitud de modificación de medidas cautelares y por otro, pretende ser la interposición de un recurso de reposición en contra de esas mismas medidas cautelares.

De lo alegado por ALBURA se desprende que el verdadero carácter de este escrito es de auténtica impugnación de las medidas cautelares adoptadas mediante la Resolución de 21 de diciembre por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Atendiendo al verdadero carácter del escrito y según el principio antiformalista recogido en el artículo 110.2 de la LRJPAC, se tramitará de acuerdo con su



## **COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES**

verdadera naturaleza, es decir, como recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma contra la Resolución de 21 de diciembre.

Asimismo, teniendo en cuenta que las resoluciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ponen fin a la vía administrativa, y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, que prevé que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, procede calificar al escrito presentado como un recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de esta Comisión de fecha 21 de diciembre de 2005.

### **Segundo.- Competencia y plazo para resolver.**

La competencia para resolver el presente recurso corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por ser el órgano administrativo que dictó el acto impugnado.

El presente recurso deberá ser resuelto y su resolución notificada en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su interposición, según lo establecido en el artículo 117.2 de la misma Ley y, siempre teniendo en cuenta las posibles suspensiones que afecten al transcurso del plazo máximo.

### **Tercero.- Admisión a trámite.**

El recurso de reposición de ALBURA ha sido interpuesto cumpliendo con los requisitos de forma establecidos en el artículo 110.1 de la LRJPAC. Asimismo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 117 de la misma Ley, por lo que, teniendo en cuenta lo anterior, procede admitirlo a trámite.

## **B. Fundamentos jurídicos materiales.**

### **Primero.- Sobre la falta de competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.**

La medida cautelar adoptada en la Resolución de la Comisión de 21 de diciembre de 2005 se encuadra en un procedimiento administrativo correspondiente a la resolución de un conflicto de acceso entre dos operadores, TELE2 Y ALBURA, en el ámbito de los artículos 11 y siguientes de la LGTel.

En el recurso presentado, ALBURA cuestiona la naturaleza del conflicto planteado. Alega que la solicitud de intervención formulada por TELE2 no es ni un conflicto de acceso ni un conflicto de interconexión, sino que se trata de una





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

disputa contractual que tendría que ser discutida en sede arbitral. En consecuencia, al no ser un conflicto de ninguno de estos tipos, ALBURA afirma que la Comisión no tiene competencia para intervenir.

Según ALBURA, la atribución competencial contenida en el artículo 14.1 de la LGTel relativa a que *“de los conflictos en materia de obligaciones de interconexión y acceso **derivadas de esta ley** y de sus normas de desarrollo conocerá la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones”*, debe interpretarse en el sentido de que el conflicto de acceso sólo existe en dos supuestos:

- Cuando se haya establecido una obligación legal de los operadores de facilitar el acceso a sus redes y no sean capaces de facilitar ese acceso; o bien
- Cuando exista un contrato o acuerdo de acceso en virtud del cual un operador se obligue frente a otro a proporcionar el acceso necesario establecido por la Ley.

Considera ALBURA que el marco legal vigente no le impone ninguna obligación de acceso y no puede establecerse la existencia de un conflicto de ese tipo.

Tampoco se trataría, a juicio de ALBURA, de un conflicto de interconexión pues para ello *“es necesario que exista al obligación legal de los operadores de interconectar sus redes y que esa interconexión no se esté realizando por las razones que sean (...) **ALBURA no estaba obligada legalmente a conectar su red con la red de TELE2 en los términos que establece el contrato**”*.

Pues bien, estas afirmaciones realizadas por ALBURA parten de una inadecuada interpretación de la regulación establecida en los artículos 11 y siguientes de la LGTel en relación con la delimitación competencial de la Comisión en materia de acceso e interconexión.

El artículo 48.2 de la LGTel determina cuál es el objeto de esta Comisión, que, entre otros aspectos, alcanza a la resolución de los conflictos que se produzcan entre los operadores. En relación con este objeto, y en lo que afecta a la materia de telecomunicaciones, el artículo 48.3 d) de la LGTel atribuye a la Comisión la siguiente función:

*“La resolución vinculante de los conflictos que se susciten entre los operadores en materia de acceso e interconexión de redes, en los términos que se establecen en el título II de esta Ley (...).”*

En el número 2 del Anexo II de esta LGTel se define el concepto de acceso como la *“puesta a disposición de otro operador, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas”*. Explica este mismo número 2 del



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Anexo II que el término acceso abarca, entre otros supuestos, *“el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local)”*.

El artículo 11.3 de la LGTel, determina que *“no existirán restricciones que impidan que los operadores negocien entre sí acuerdos de acceso e interconexión”*.

Específicamente, con relación a los conflictos que se produzcan en esta materia de acceso, el artículo 11.4 de la LGTel establece que *“la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá intervenir en las relaciones entre operadores, a petición de cualquiera de las partes implicadas, o de oficio cuando esté justificado, con objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, así como la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3”*.

El artículo 14 de la LGTel reitera la competencia que corresponde a la Comisión para resolver este tipo de conflictos, concretando, además, ciertos aspectos del procedimiento a seguir por la Comisión a este objeto:

*“De los conflictos en materia de obligaciones de interconexión y acceso derivadas de esta Ley y de sus normas de desarrollo conocerá la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Ésta, previa audiencia de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo máximo de cuatro meses a partir del momento en que se pida su intervención, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva.”*

En conclusión, el artículo 11.4 de la LGTel atribuye a la Comisión la competencia para intervenir en las relaciones entre operadores, a petición de cualquiera de las partes implicadas o de oficio, con objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la adecuación del acceso. Existe una atribución expresa de competencia en la resolución de conflictos de acceso en el supuesto de solicitud de una de las partes implicadas, en el presente supuesto la petición fue presentada por TELE2.

Resulta clarificador la redacción dada por el art. 23.3 del Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración<sup>1</sup> (en adelante, Reglamento de Mercados) en el que se distinguen diversos supuestos en los que esta Comisión tiene atribuidas sus competencias en materia de acceso e interconexión señalando que ésta, entre otros supuestos:

- a) *Podrá intervenir en las relaciones entre operadores, a petición de cualquiera de las partes implicadas, o de oficio cuando esté justificado.*

<sup>1</sup> Aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- b) *Conocerá de los conflictos en materia de obligaciones de interconexión y acceso derivadas de la Ley 32/2003(...), de este reglamento y de otras normas de desarrollo de la citada ley (...).*

En el supuesto que se está examinando la competencia de esta Comisión para conocer del presente conflicto encajaría en el apartado a) del art. 23.3 anteriormente citado. Existe un contrato entre las partes cuyo objeto es la fijación de las condiciones de prestación del acceso de TELE2 a la red de ALBURA; y una de la partes, TELE2, ha instado la intervención de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones con el fin de garantizar la adecuación del acceso. Por tanto, se trataría de un conflicto de acceso en la medida en que el mismo se refiere a las condiciones de acceso a los servicios de acceso indirecto, desagregado compartido y completamente desagregado (contemplados en su contrato) que permiten a TELE2 acceder al bucle local de sus clientes y prestar, por su parte, a los mismos, servicios de transmisión de datos de banda ancha. Aun cuando ALBURA no esté obligada por la CMT a otorgar el acceso a terceros operadores, al no ser operador designado con poder significativo de mercado, ha consentido contractualmente, de manera libre, dar el acceso a sus redes previsto en la normativa de telecomunicaciones, por lo que esta Comisión está apoderada para resolver las controversias de aplicación y ejecución del contrato de acceso, en el marco de sus competencias. La capacidad de la CMT para intervenir en las relaciones de acceso no está limitada a los supuestos en que el acceso esté impuesto como medida en uno de los mercados de referencia, puesto que la competencia de la CMT para resolver conflictos de acceso (art. 14.1 LGTel) se refiere a los conflictos en materia de acceso e interconexión derivados de esta ley y de su normativa de desarrollo, y dentro de la ley no sólo se regula la obligación de acceso como medida establecida por la CMT para la salvaguarda de la competencia en los mercados de referencia (art. 13) sino también como resultado de un acuerdo de acceso libremente pactado entre operadores (art. 11.3).

Toda esta regulación resulta acorde con el marco jurídico de derecho comunitario concretado en este punto en los artículos 3 y siguientes de la Directiva 2002/19/CE, de 7 de marzo, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión (Directiva de acceso).

Nos encontramos, pues, con un acuerdo de acceso, un contrato, entre ALBURA y TELE2, respecto del cual una de las partes, TELE2, está disconforme con su ejecución, por lo que en base a la competencia atribuida por el art. 11.4 de la LGTel, acude a la Comisión para que resuelva el conflicto, garantizando la adecuación del acceso.

La afirmación de ALBURA de que «*la controversia que enfrenta a las partes es una disputa puramente contractual*» no desvirtúa la competencia de



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

intervención de la Comisión, en cuanto que el objeto del contrato es *«establecer las condiciones técnicas, económicas y comerciales en las que ALBURA prestará a TELE2 “Servicios de Acceso”, incluyendo servicios de “Acceso Indirecto” y servicios de “Acceso Desagregado Compartido”»*. La solicitud de TELE2 para que la Comisión intervenga en la relación *“contractual”* entre dos operadores garantizando la adecuación del acceso encaja en lo dispuesto por el art. 11.4 de la LGTel y 23.3 del Reglamento de Mercados, debiendo aplicarse el procedimiento previsto en el art. 14.1 de la LGTel.

Evidentemente, esta cuestión afecta a los objetivos e intereses generales que se tutelan en la normativa de telecomunicaciones. Se trata de un conflicto entre operadores y de las consecuencias que el mismo puede tener para el mercado: de forma directa, para los usuarios de los servicios afectados y para el operador respecto del que se quiere negar el acceso, TELE2, cuya presencia en el mercado podría quedar seriamente afectada por la resolución del contrato, y de forma indirecta, para la confianza en general de los diferentes agentes del mercado en la seguridad de los nuevos servicios de banda ancha.

Pues bien, precisamente, ha de destacarse que, aunque la normativa de telecomunicaciones no imponga a ALBURA (por no ser operador dominante) la obligación de prestar a los operadores interesados el acceso que suministraba, la obligación voluntariamente asumida por este operador en este sentido (por medio del contrato suscrito con TELE2), sí le vincula, y, en lo que respecta a lo dispuesto en la normativa de telecomunicaciones (y a la concreta medida que impone la Resolución recurrida), hay que decir que la especial confianza en el tráfico que se requiere para el desarrollo de los nuevos servicios (y, específicamente, como expone la Resolución recurrida, de los servicios de banda ancha) hace necesario que estos pactos libremente asumidos (sobre los que los operadores involucrados realizan sus previsiones de negocio, y presentan sus propias ofertas al mercado) tengan cumplimiento. Se trata de atender las previsiones suscitadas en los demás agentes del mercado conforme a lo libremente comprometido.

Por tanto, ha de desestimarse la objeción de ALBURA relativa al carácter de conflicto de acceso de la cuestión planteada, confirmándose la competencia de esta Comisión ya que resulta evidente que estamos ante un conflicto de acceso entre TELE2 y ALBURA, sin perjuicio de que la disputa meramente contractual se dirima en sede arbitral o en la que fuere pertinente.

### **Segundo.- Sobre la vulneración del artículo 728.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil alegada.**

ALBURA invoca el artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Alega que según este precepto, no se podrán adoptar medidas cautelares en aquellos casos en los que se pretenda alterar situaciones que han sido consentidas por el solicitante.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El tenor literal de esta norma establece que:

*“No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces.”*

ALBURA alega que, tal y como se pone de manifiesto en el burofax aportado por la propia TELE2, efectivamente, ésta era consciente de la existencia de un posible corte desde mediados de octubre consintiendo, por tanto, dicha supresión.

El artículo 48.12 de la LGTel establece que la Comisión, en el ejercicio de sus funciones *“podrá en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, adoptar las medidas cautelares que estime oportunas para asegurar la eficacia del laudo o de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio para ello”*.

Pues bien, es preciso señalar que la situación de hecho preexistente a la medida cautelar adoptada era la de la efectiva prestación de los servicios de acceso por parte de Albura a TELE2 cuya interrupción, por la desconexión, sí hubiera generado una alteración abrupta de esa realidad de hecho que la medida adoptada, precisamente, evitó hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la disputa planteada en relación con la vigencia del acuerdo sobre el que el acceso se sustenta.

En ningún caso puede reputarse situación de hecho aceptada lo que, justamente, no ha llegado a ser tal; TELE2 estaba accediendo a la red de Albura en el momento en que la medida cautelar, impidiendo la desconexión, evitó la alteración del status quo existente.

### **Tercero.- Sobre las medidas cautelares adoptadas en la Resolución de 21 de diciembre de 2005.**

ALBURA alega que no concurren los requisitos necesarios para la adopción de la medida cautelar que estableció la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones mediante la Resolución de 21 de diciembre de 2005.

La Resolución recurrida, para una mejor exposición, comienza explicando cuáles son los requisitos que la Ley y Jurisprudencia exigen para la adopción de medidas cautelares para, posterior e individualizadamente, estudiar y comprobar si existen cada uno de ellos. En el fundamento de derecho segundo (pág. 9) de la citada Resolución se dice que:





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*“El artículo 72 de la LRJPAC permite, al órgano competente para resolver el procedimiento, adoptar medidas cautelares, de oficio o a instancia de parte, cuando ello sea necesario para “asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer”, y “si existen elementos de juicio suficientes para ello”. Según el apartado 3 de este artículo, “No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de imposible o difícil reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes”.*

*Tomando en consideración estas prescripciones, la jurisprudencia ha sistematizado **los requisitos que permiten a una Administración Pública la adopción de una medida cautelar**. Tales requisitos son los siguientes:*

- **Habilitación competencial** (existencia de una norma que permita la adopción de una medida cautelar).
- **Apariencia de buen derecho** (“*fumus boni iuris*”).
- **Necesidad y urgencia de la medida** (“*periculum in mora*”).
- **Proporcionalidad e idoneidad de la medida.**”

En base a estos requisitos, a continuación se da respuesta a todas y a cada una de las alegaciones que, en contra, hace ALBURA.

### a) Sobre la habilitación competencial.

En la Resolución recurrida se determina que “*la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones está legalmente habilitada para adoptar medidas cautelares en los procedimientos que tienen por objeto la resolución de conflictos de acceso entre operadores*”. En el punto anterior ya se ha visto que estamos ante un conflicto de acceso en el que la Comisión es competente para intervenir de acuerdo con toda la normativa citada. Además, según el artículo 48.12 de la LGTel ya citado, la Comisión podrá adoptar, en cualquier momento, las medidas cautelares que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que recaiga en su momento, en el ejercicio de sus funciones.

En conclusión, este requisito se cumple de acuerdo con la normativa mencionada que habilita a la Comisión a adoptar esta medida cautelar.

### b) Sobre la apariencia de buen derecho.

ALBURA no alega nada sobre este requisito explícitamente, sin embargo, a lo largo de su escrito pone de manifiesto en distintas ocasiones que TELE2 está actuando de manera maliciosa y fraudulenta, todo ello para confundir a esta Comisión. Afirma que nunca fue su intención proceder al corte del suministro y que, en todo caso, era plenamente consciente de la importancia del interés de los usuarios finales del servicio. ALBURA alega que en “apariencia” no se iba a





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

proceder a cortar el acceso a TELE2, no existiendo, por tanto, apariencia de buen derecho en la pretensión de TELE2.

La exigencia de este requisito para la adopción de las medidas cautelares no se establece en la ley sino que han sido la doctrina y jurisprudencia quienes han delimitado y perfilado este concepto jurídico. Aplicando al caso el principio del *"fumus boni iuris"*, TELE2 tenía que tener, a priori y sin realizar ningún examen en profundidad del conflicto, la apariencia de ostentar el derecho invocado.

La realidad fue que esta Comisión tuvo noticia del conflicto existente entre ambas entidades cuando apenas quedaban 12 días para que se hiciera efectivo el corte del suministro por ALBURA a TELE2. Esta Comisión comprobó que existía una relación contractual entre ambas formalizada en contrato fechado el 9 de junio de 2004, mediante el cual ALBURA se obliga a prestar acceso a TELE2. Además, era patente la disputa y diferencias derivadas del contrato. En la documentación aportada por TELE2, en ese primer momento, se aportaba un burofax remitido por ALBURA donde efectivamente, entre otras cosas, se apercibía del corte del suministro a 31 de diciembre.

A la vista de los hechos constatados, habiendo asumido ALBURA la obligación contractual de suministrar el acceso a TELE2 y, teniendo en cuenta los intereses en juego tanto de los usuarios finales a los que toda la normativa, especialmente en telecomunicaciones, protege; como en aras de asegurar la pluralidad de ofertas en el mercado, la pretensión de TELE2 se encontraba, razonable y suficientemente fundamentada.

Igualmente, la pretensión de continuidad planteada por TELE2 tiene, en principio, visos de razonabilidad basándose en el artículo 1256 del Código Civil que establece que *"la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes"*. Es decir, en derecho, no basta con que una de las partes contratantes alegue un desistimiento unilateral de una relación contractual, sino que habrá que estar a lo que diga el contrato y ser aceptada por la otra parte. En el contrato se prevé la extinción por incumplimiento de una de las partes. Sin embargo, en la fecha de interposición del recurso no había quedado constatado definitivamente aún por la CMT ningún incumplimiento de forma inequívoca, pendiente la resolución final.

En conclusión, la Resolución de 21 de diciembre tiene presente en la adopción de la medida cautelar recurrida este requisito de apariencia de buen derecho en la pretensión de TELE2.

- c) Sobre la necesidad y urgencia de la medida. El denominado "periculum in mora". Adopción de la medida inaudita parte.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de junio de 2005 (núm. 224/2005) se explica acerca del “periculum in mora” que:

*«Más que de un verdadero presupuesto, la causa y fundamento últimos que amparan la adopción de cualesquiera medidas cautelares radica, precisamente, en el peligro “de retardo”; esto es, la existencia de potenciales riesgos que amenacen y hagan potencialmente incierta la efectividad de un futuro pronunciamiento contrario a quien ocupa la posición del sujeto pasivo en el proceso principal».*

Por su parte, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 28 de noviembre de 2003, ha determinado que:

*«la finalidad legítima del recurso es, no sólo, pero sí prioritariamente, la efectividad de la sentencia que finalmente haya de ser dictada en él; de suerte que el instituto de las medidas cautelares tiene su razón de ser, prioritaria, aunque no única, en la necesidad de preservar ese efecto útil de la futura sentencia, ante la posibilidad de que el transcurso del tiempo en que ha de desenvolverse el proceso lo ponga en riesgo, por poder surgir, en ese espacio temporal, situaciones irreversibles o de difícil o costosa reversibilidad.*

*La pérdida de la finalidad legítima del recurso es, así, la causa que legitima la adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas, suficientes y no excesivas, para evitarla en el caso en concreto, valorando para ello, de manera circunstanciada, esto es, atendiendo a las circunstancias del caso, todos los intereses en conflicto (...).*».

La ley exige que la necesidad y urgencia de la medida queden debidamente acreditadas, cuestión que se recoge en la resolución recurrida.

De esta manera, la justificación se basa en que de no haberse adoptado la medida cautelar, la resolución del procedimiento “podría quedar desvirtuada, pues la interrupción de los servicios de TELE2, consecuencia de la supresión de los accesos de Albura, se produciría en 10 días, con las correspondientes consecuencias para los servicios que se prestan a los usuarios y para la confianza que estos mismos puedan tener en la prestación de los servicios de banda ancha” (pág. 20 de la Resolución de 21 de diciembre de 2005).

Por otro lado, de producirse la supresión anunciada, los trámites que debería llevar a cabo TELE2 con Telefónica de España para dar de alta los accesos que inicialmente tuviera contratados se retrasarían bastante con el consiguiente perjuicio para los usuarios finales.

En consecuencia, resultaba necesaria la adopción de la medida para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, urgencia que venía acreditada dados los términos de la interrupción del servicio anunciados por ALBURA. De



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

no adoptarse la pérdida de confianza y los perjuicios a los usuarios finales eran de muy difícil reparación, frente al hipotético daño que sufriría ALBURA ante el retraso en la desconexión.

En la Resolución de 21 de diciembre de 2005, se concluye que los perjuicios que ocasionaría la supresión que se pretenden evitar serían de difícil reparación. Además, siguiendo la línea jurisprudencial anterior, toda medida cautelar tiene su razón de ser en la necesidad de preservar ese efecto útil de la futura resolución. Y en este caso, es muy claro ese efecto útil, que es la continuidad de los servicios de acceso para y por los usuarios finales, en aras de protegerlos así como el funcionamiento del mercado, intentado evitar que por un conflicto entre operadores se vea afectado el servicio de manera directa e irreversible.

En conclusión la Resolución de 21 de diciembre de 2005 sí ha tenido en consideración este requisito para la adopción de la medida cautelar recurrida.

### d) Sobre la proporcionalidad e idoneidad de la medida.

El límite legal para la adopción de medidas cautelares es que quedan prohibidas aquéllas cuya adopción pueda causar un perjuicio de imposible o difícil reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados en las leyes, de acuerdo con el artículo 72.3 de la LRJPAC.

En la Resolución recurrida se establecía<sup>2</sup> que la “*medida cautelar resulta idónea para el objetivo perseguido (evitar una supresión inesperada o sin tiempo suficiente para la búsqueda de alternativas del acceso que se viene prestando y que sirve para permitir la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público)*”. A mayor abundamiento, la resolución recurrida determina que cualquier otra alternativa no permitía, con igual eficacia, conseguir el resultado perseguido.

La Comisión tuvo en cuenta otros criterios a parte de los económicos para determinar si esta medida era o no idónea. En la propia Resolución se reconoce que de existir algún perjuicio para ALBURA este sería de tipo económico y que, en ningún caso, de difícil reparación.

Esta Comisión determinó que la medida más idónea y proporcionada, a la vista de los hechos y dadas las circunstancias, es que se siguiera manteniendo el servicio de acceso de ALBURA a TELE2 porque es la manera natural de dar continuidad al servicio.

La Resolución de 21 de diciembre de 2005 ha impuesto, en todo caso, una medida cautelar proporcional e idónea a ALBURA. No se constata en ningún caso que se le pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación con

<sup>2</sup> Página 21 de la Resolución de 21 de diciembre de 2005.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

esta medida. Tampoco ALBURA ha demostrado la existencia de ese perjuicio, y menos aún, que este fuera de naturaleza irreparable.

e) Sobre la adopción de la medida cautelar inaudita parte.

ALBURA muestra su disconformidad a que la medida cautelar se hubiese adoptado inaudita parte ya que considera que no existen motivos de urgencia y necesidad. En este punto nos remitimos al apartado c) de este mismo apartado.

Únicamente, destacar, una vez más, el tiempo limitado (12 días) que tenía esta Comisión para resolver sobre la adopción de la cautelar de forma que ésta no perdiese sentido por realizarse fuera del plazo establecido por ALBURA para el mencionado corte.

En definitiva, procede desestimar esta alegación ya que Resolución de 21 de diciembre de 2005 adopta una medida cautelar cumpliendo todos y cada uno de los requisitos exigidos legalmente.

### **Cuarto.- Sobre la solicitud de caución.**

ALBURA alega que la adopción de la medida cautelar le puede irrogar perjuicios a pesar de que, a juicio de la Comisión, esos perjuicios fueren en todo caso de tipo económico. Manifiesta en su escrito que:

*“acepta la medida cautelar acordada, siempre y cuando se modifique en el sentido de que se acuerde la necesaria prestación de caución por parte de TELE2 para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pueda ocasionar a ALBURA”.*

ALBURA señala que aunque no se han producido impagos en relación con los servicios prestados en el ámbito del contrato, TELE2 no ha constituido la Prenda en Cuentas a Cobrar, prevista en la cláusula 9.3 del contrato, que garantizaría el pago por penalización que debería abonarse en caso de incumplimiento.

ALBURA considera que, como consecuencia de la medida cautelar adoptada, no puede hacer uso de las infraestructuras y equipos técnicos que debe emplear para dar servicio a TELE2 y tampoco puede “reorientar” o “rediseñar” su estrategia empresarial. En este sentido debe tenerse en cuenta que la entidad COMUNITEL (adquirida por TELE2) es competidor de ALBURA, lo que concede una mayor ventaja a TELE2.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por todo esto, ALBURA solicita que se modifique la medida cautelar y se acuerde la prestación por parte de TELE2 de una caución de, al menos, 6.188.077,42 euros. Cantidad que TELE2 está obligada a pagar por incumplimiento de sus obligaciones. Según ALBURA, sólo cuando se acuerde la prestación de esta caución, la medida será realmente idónea y proporcional.

Por otra parte, TELE2 alega que esta solicitud de ALBURA de imposición de caución para garantizar la medida cautelar, cuantificada en base a la indemnización contractual por daños y perjuicios, es contradictoria con todo el recurso presentado por esta última. TELE2 considera que la caución solicitada no puede ser impuesta en el presente expediente pues supondría prejuzgar el fondo del asunto contractual. Añade que, en todo caso, los perjuicios que pudieran derivarse de la medida cautelar deberían ceñirse únicamente a la esfera del lucro cesante.

Para asegurar que la medida cautelar no causa daño al que ha de soportarla deben acordarse las previsiones que sean adecuadas para evitar ese perjuicio. Igualmente, se puede exigir la presentación de caución o garantía suficiente para responder de los posibles perjuicios que se causan al obligado a soportar la cautelar correspondiente. La doctrina y jurisprudencia coinciden en definir la caución como la medida mas importante dentro de las contra cautelas, esto significa que quien se vea favorecido por una cautelar se le podrá exigir caución derivada de los daños y perjuicios que se le pudieran causar por el establecimiento o mantenimiento de la medida cautelar.

Por esto, TELE2 no tiene razón al alegar que la imposición de la caución solicitada supondría prejuzgar el fondo. La caución o contra-cautela es un mecanismo de prevención para evitar daños injustos a quien ha de soportar una medida cautelar.

La cautela corre a cargo de quien haya solicitado la medida cautelar, en este caso, TELE2. ALBURA cuantifica la cautela en base a la cantidad que, según ella, le debe TELE2 por todos los incumplimientos contractuales que han originado el conflicto.

La decisión de modificar una medida cautelar exigiendo una caución o garantía debe valorarse según las circunstancias concurrentes, sin que se pueda apreciar un cambio en las circunstancias que motivaron en su momento su adopción, conforme con lo establecido en el artículo 72.4 LRJPAC.

Como ha señalado la jurisprudencia, la exigencia de caución es facultad que corresponde al órgano que adopta la medida cautelar *“según la apreciación que obtenga sobre si de la misma puede resultar algún daño o perjuicio a los intereses públicos o de terceros”*.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

La jurisprudencia ha adoptado como criterios para apreciar la necesidad de la adopción de una caución la producción de inmediato de graves perjuicios a los intereses económicos de la recurrente, el repercutir negativamente en el normal desenvolvimiento del negocio, produciéndose daños irreversibles, y, teniendo en cuenta graves vicios de validez del acto que denuncia<sup>3</sup>. En el presente supuesto no se aprecia la existencia de los mencionados requisitos.

La justificación del establecimiento de una caución supone valorar diversos factores de los que se derive la necesidad de asegurar los perjuicios que se inflijan a la otra parte. En este sentido, un aspecto a tener en cuenta es el hecho de que sea presumible la insolvencia de la entidad que, en su día, deberá indemnizar.

De los datos obrantes en esta Comisión, así como de las propias declaraciones de la recurrente no parece que existan indicios fundados para apreciar insolvencia por parte de TELE2, lo que no supone un juicio sobre su situación financiera, ni posibles cambios que a futuro pudieran darse.

En cuanto a la incidencia que la medida adoptada va a suponer sobre la estrategia empresarial de ALBURA, del examen del número de bucles desagregados en relación con los contratados por TELE2 en el ámbito del contrato, es decir, de los datos sobre la evolución de la desagregación del bucle (compartido) de ALBURA, aún siendo cifras elevadas las relativas a TELE2 y sin negar su relevancia, esta Comisión considera que permiten mantener a la recurrente su estrategia empresarial y continuar con el desarrollo de su actividad, aún reconociendo su incidencia en la actividad de la recurrente, no cuantificada.

La medida cautelar no altera la obligación previamente adquirida por ALBURA, sino que la obligación que se impone a Albura consiste en que siga prestando el servicio, lo que pasa por mantener una obligación existente. El contrato entre las partes regula unas determinadas prestaciones por parte de Albura y una determinada remuneración en compensación, con unas determinadas condiciones de facturación y forma de pago.

En consecuencia, teniendo en cuenta la falta de perjuicios acreditados, no resulta procedente modificar la medida cautelar adoptada.

Vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión

### RESUELVE

**Único.-** Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ALBURA TELECOMUNICACIONES, S.A.U. contra la Resolución de esta Comisión de 21

<sup>3</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 27 de abril de 2004.





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

de diciembre de 2005 por la que se adoptan medidas cautelares en el conflicto de acceso presentado por TELE2 TELECOMMUNICATION SERVICES, S.L. frente a ALBURA TELECOMUNICACIONES, S.A.U. en relación con la supresión de los servicios de acceso indirecto y desagregado compartido por parte de este último operador.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolución a la que se refiere el presente certificado, que resuelve un recurso potestativo de reposición, no puede interponerse de nuevo dicho recurso de reposición. No obstante, contra la misma puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

Jaime Almenar Belenguer

Reinaldo Rodríguez Illera